

establecidos por el art. 27 de la Constitución federal, no como se han dictado, llenando esos requisitos supuesto que se manda practicar la ocupación según las leyes.

Tercero; que respecto del reglamento, según el informe del C. gobernador, cuando llegue el caso de ocupar algunos terrenos que resulten al hacer la medición, ser de la propiedad de la Señora Ibarra, sus derechos serán respetados de la manera mas eficaz. Por lo expuesto que demuestra no haber la violación de garantías que ha invocado el representante de la quejosa, y con fundamento de la ley de 20 de Enero de 1869: se resuelve, que es de confirmarse y se confirma la sentencia del Juez de Distrito de Coahuila pronunciada en tres de este mes, en virtud de la cual declara:

Primero; que la justicia de la Union no ampara ni protege al C. Lic. Ignacio Galindo representante de la Señora Doña Luisa Ibarra de Zuhaga, contra el decreto núm. 123 expedido por el honorable Congreso del Estado, con fecha 20 de Febrero del corriente año.

Segundo; que así mismo no lo ampara ni protege contra lo dispuesto en el reglamento del gobierno del Estado, expedido en 20 de Abril de este año.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia por los efectos consiguientes: pùbliquesse por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretáron por mayoría de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*José García Ramírez.*—*M. Zavala.*—*S. Guzman.*—*M. Auza.*—*J. M. Infraña.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico México, Julio

treinta y uno de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta* oficial mayor.

PAPEL SELLADO.

Juicio seguido ante el Juzgado de Distrito de Nuevo Leon, contra D. Tomás Cantu, sobre cobro de una multa por infracción de la ley de papel sellado.

PEDIMENTO FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que se le ha pasado este expediente formado con motivo de la multa, que se impone á los fiadores del extranjero D. Guillermo A. Cook, para que ejerza su ministerio, y supuesto su estado que es el de hacer aplicación de pruebas, pasa el fiscal á emitir su parecer en vista de las constancias todas recogidas en estos autos, y en vista de lo dispuesto por la ley para casos semejantes.

Dos son, en concepto del Fiscal, las cuestiones que hay que tratar para cerciorarse y venir en conocimiento de si procede ó no la multa que se exige, si debe ó no hacerse efectiva, por los capítulos antes expuestos, ó por algunos de ellos no procede la multa y por otros sí; esto es, si solo debe exigirse la que al principio se creyó justa y única conforme á la ley, y no así la otra, que se juzgó procedente por la cuenta de que se hizo mérito en unos documentos.

Sea la primera cuestion esta: los documentos, las copias autorizadas que se han presentado en estos autos extendidos en el papel sellado no correspondiente, causan ó no la multa que se exige. El señor apoderado de dichos fiadores sostiene, que no porque dice que esos documentos no son copias, aunque en ellos se han incluido futebras y con todas sus cláusulas unas escrituras de fianza, sino simples certificados que conforme á la fracción 1ª del art. 17

de la ley sobre usos de papel sellado, bien pueden extenderse en el papel del sello 2º de actuaciones.

A esto se reduce su principal argumento en el caso.

Mas, al fiscal no parece exacto este modo de raciocinar, porque en primer lugar tales documentos, no son ni pueden nunca considerarse como simples certificados, sino como verdaderas copias, que por consiguiente, han debido ser extendidas en el papel sellado correspondiente, segun el valor que en ellas se representa y que en el caso atendido ese valor, debieron serlo en el sello 1º de actuaciones para el primer pliego como espresamente se previene en la fraccion 8ª del artículo 15 de la propia ley; y en segundo lugar, porque aun considerando á tales documentos como simples certificados, se debieron estender en el papel sellado correspondiente segun el valor que iban á representar ó representaban, porque si es verdad que en la citada fraccion 10ª del artículo 17 se dice que pueden ser extendidos los certificados ó todo documento que para hacer fé se otorgue entre particulares ó á su favor, tambien es verdad que esto se debe referir y de facto se refiere á los documentos que no están determinados en la dicha ley, pero no á los que lo están como son los documentos de que se habla en la citada fraccion 8ª del artículo 15, á los que pertenecen segun su cuantía el de que se trata.

Se dice tambien á este respecto y para exceptuarse de la multa que se exige por la infraccion notada, que la única pena impuesta á esta clase de documentos, segun el art. 53 de la citada ley sobre usos de papel sellado, es la de que no hagan fé en juicio, y que por consiguiente ninguna otra se puede imponer en el caso.

Pero el fiscal juzga que una interpretacion semejante de la ley para el caso que nos ocupa es demasiado lata, porque si bien es cierto que tal es la letra de la ley en el citado artículo 53, tambien es cier-

to que las palabras de la ley deben concordar entre sí, y tender á un mismo fin.

De lo contrario seria inconsecuente la ley aun con ella misma, pues apenas se concibe que haya querido imponer pena pecuniaria, multa á solo los documentos estendidos en papel comun, como vales, libranzas, pagarés, y no á los demas documentos estendidos de igual modo, para los que la pena se reduce á que no hagan fé en juicio, cuando hay la misma razon para imponerse aquella pena, la multa á todo documento que no esté estendido en el papel sellado correspondiente, porque tanto en unos como en otros documentos así estendidos, se comete un fraude á la hacienda pública, fraude que es propiamente por el que se impone la multa.

Y en este caso lo mismo que en los que se le asemejan, se hace tanto mas necesario que se imponga una verdadera pena, una multa por la infraccion que se note en este respecto, cuanto que de lo contrario, en lugar de ser penados los infractores, se los premia, porque sin duda, que si por tal motivo se debiera considerar la fianza otorgada por esos señores como que no hace fé en juicio, esto seria un bien para dichos fiadores, porque así se quitaban toda responsabilidad, la responsabilidad de su fiado; y vendria á ser esto como se ha dicho, no un castigo, sino mas bien un premio. Enhorabuena que cuando dos contratantes se perjudican, es decir, sufren una pena con que el documento de su contrato se declare inválido en juicio, esta sola sea la pena que se imponga por la ley para castigar una infraccion semejante; pero que sea ó deba ser la misma cuando uno de los contratantes solo se perjudicaria con tal suceso, esto no se concibe si no es como se ha dicho poco ha, que en lugar de pensarse al infractor de la ley se le premia con tal declaracion, porque sin duda para un fiador le es mas provechoso que se declare en juicio, como que no hace fé en juicio la escritura de su fian-

za, que se declare lo contrario; y tendríamos con semejante modo de entender la ley á ciertos casos que se presentan en la práctica, con que siempre que algun contratante de mala fé y que quisiera burlar á la otra parte de la obligacion que para con ella hubiera contraído por medio del contrato, no haria mas para conseguir esto que cometer otro fraude, el fraude á la hacienda pública, estendiendo el documento de su contrato en el papel sellado no correspondiente, satisfecho que ateniéndose al sentido puramente literal de la ley no debería tener mas pena por semejante fraude; mejor dicho, que el que cometiese, le debería redundar en su provecho.

No es posible, pues, que tal haya sido la intencion de la ley al castigar los fraudes que se cometan en el uso, de papel sellado, y no pudiendo ser esto justo, legal, ni equitativo, tenemos por precision que recurrir á la analogía para los casos semejantes que ocurran en la práctica y juzgar por ella segun el valor del documento, imponiendo al infractor de la ley, en un caso dado la misma pena que está señalada para los documentos de libranzas, cuentas, recibos, etc. La otra cuestion versa sobre la multa por la cuenta.

Y en ella, lo que sí cree el fiscal despues de las esplicaciones dadas y pruebas rendidas es, en que á su juicio no debe imponerse á estos señores multa por la infraccion de la cuenta que presentó al Juzgado el Sr. Cook porque no aparece, aunque era natural considerarlos que ellos tuvieran siquiera conocimiento de tal cuenta, mucho menos que la aceptaran como buena y legítima, únicos casos en que serian acreedores á la multa.

Concluye, pues, el fiscal proponiendo al Juzgado de su digno cargo la aprobacion de la siguiente proposicion.

Unica. Los fiadores del Sr. Cook, son responsables de la multa que se les exige por la infraccion de la ley cometida en los documentos que han presentado al Juzga-

do, declarándoseles absueltos por lo que respecta á la cuenta, de que tambien se les exigia en vista de las esplicaciones dadas y pruebas rendidas sobre este particular.

Monterey, veintitres de Mayo de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Antonio María Elizondo.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Monterey, Mayo treinta de mil ochocientos setenta y uno.

Visto este juicio ejecutivo, seguido contra D. Tomás Cantú y demas fiadores de Guillermo Cook, vecinos de la Villa de Toran, sobre cobro de una multa de \$ 1079, 95 es, mil setenta y nueve pesos noventa y cinco centavos, en que se les considera incurso por haber presentado en juicio en papel sellado que no corresponde, la fianza que otorgaren por valor de once mil quinientos cincuenta pesos, y por haber admitido una cuenta que presentó Cook con el mismo defecto, valiosa en su mayor suma de nueve mil ochocientos cuarenta y nueve pesos; vista la declaracion que hizo de la multa el alcalde 2º de la misma Villa de Toran, al resolver definitivamente con dictamen de asesor, la cuestion que suscitaron dichos fiadores contra Cook sobre liberacion de la fianza; las copias de los documentos que han motivado la multa; el embargo de bienes que se hizo á los ejecutados por haberse rehusado al pago; las excepciones que opuso su apoderado Lic. D. Simon de la Garza y Melo, y las pruebas que produjo en los diez dias del onerado; visto el escrito que presentó el administrador principal de la renta de papel sellado al evacuar el traslado que se le dió para alegar de buena prueba, en el cual pretende que no se le tenga como parte en este juicio, por no haberlo promovido, dejando á salvo los derechos de la renta contra los funcionarios que infringieron los artículos 56 y 57 de la ley de papel sellado de 14 de Fe-

brero de 1856; visto el auto en que se falló este art. declarándose que dicho administrador está en el deber de perseguir los fraudes que se cometan contra la renta, dándose por evacuado el traslado que se le había corrido; de cuya determinación interpuso el recurso de apelación y habiéndoselo negado, intentó el de denegación que lo fué admitido, expidiéndosele el certificado que previene la ley; visto lo que expuso el apoderado de los ejecutados en su alegato de buena prueba, reproduciendo las excepciones, que opuso á la ejecución, las cuales se redujeron á que el documento de la fianza es verdaderamente un certificado, que el sello 3º de actuaciones en que está estendido es el que corresponde; y que en caso de no ser así, el art. 58 de la ley de papel sellado no le impone mas pena que la de no hacer fé en juicio; y que respecto de la cuenta, no deben ser multados, por que esta fué presentada por Cook y ellos ni la vieron, ni la admitieron; visto el dictamen del Ministerio fiscal, quien solo insiste en que se haga efectivo el pago de la multa por la fianza, fundado en razones de analogía, y no por la cuenta, dando por probado que los ejecutados no la admitieron ni supieron cuando se presentó; y visto finalmente todo lo demás que debió verse y convino tener presente.

Considerando; que la fianza se encabeza en forma de certificado y concluye como testimonio, y que bajo una y otra forma debió estenderse segun su cuantía en el sello 1º de actuaciones, conforme al art. 15 fracción 7ª de la ley citada de 14 de Febrero de 1856: que siendo un contrato el que se consignó en ese documento, y no importando libranza, factura, cuenta ó recibo, no pueden tener aplicación las multas que señalan los artículos 50 y 51, debiendo considerarse comprendido en el 53 de la misma ley; y que segun ese artículo dicho documento no puede llevar otra pena que la de no hacer fé en juicio en favor de los infractores y sus complices, en

cuyo sentido fué interpretado por la circular del Ministerio de hacienda de 16 de Agosto de 1862, que resolviendo las dudas que habían ocurrido sobre su inteligencia, declaró que todo contrato que se celebre y no esté estendido en papel del sello correspondiente, no tenga valor en juicio, y que si representa recibo de alguna cantidad, se aplique entonces la multa de un diez por ciento, quedando así rehabilitado para surtir sus efectos por el valor que acredite; pero sin que sea valedero por contrato: que estando así bien aclarada la inteligencia de dicho artículo, no debe ocurrir para resolver la cuestión á las analogías en que se ha fundado el Ministerio fiscal para insistir en la imposición de la multa que pidió desde el principio por la presentación de este documento, quedando sin embargo espedido el derecho de la renta para perseguir la multa en que hayan incurrido los funcionarios que lo estendieron ó admitieron con infracción de los artículos 55 y 56 de la ley citada: que respecto de la cuenta han probado plenamente los ejecutados que fué presentada por Cook en unas diligencias que se instruyeron sobre una providencia precautoria que ellos mismos solicitaron antes de promover el juicio sobre liberación de la fianza, y que ni ellos la vieron ni la admitieron; bajo cuyo concepto no se les puede considerar comprendidos en el art. 51 que señala la pena en que incurrn los que producen ó admiten cuentas, facturas ó recibos en sellos que no corresponden. Fundado en estas consideraciones, y de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones legales citadas, este Juzgado de Distrito falla:

Primero; que D. Tomás Cantú y demás fiadores de D. Guillermo A. Cook, ni por la fianza ni por la cuenta han incurrido en la multa que se les designó; no llevando la fianza otra pena que la de no hacer fé en juicio en favor de los infractores, por no haberse estendido en el papel sellado que la ley determina.

Segundo; que no debe llevarse adelante la ejecución, y se le alzo el embargo, librándose al Administrador de la renta del papel sellado la orden correspondiente, para que mande devolver los bienes secuestrados; dejándose á salvo los derechos de la renta, para exigir las multas en que hayan incurrido los funcionarios que estendieron ó admitieron dichos documentos con infracción de los artículos 55 y 56 de la ley de papel sellado.

Tercero; que notificada esta resolución, se mande publicar en el periódico Oficial del Estado, sacándose dos copias; la una para remitirse al Ministerio de Justicia, y la otra con copia del dictamen fiscal á la secretaría de la Suprema Corte, conforme á su circular de 31 de Diciembre último.

Yo el Juez de Distrito de este Estado así lo resolví, mandé y firmé, actuando con testigos de asistencia: doy fé.—*Lic. José María Martínez.*—*A. Carlos Landeros.*—*A. Abelardo Morales.*

Es copia que certifico Monterrey Mayo treinta y uno de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. José María Martínez.*

OTVLL.

Juicio verbal seguido ante el Juegado de Distrito de Sonora contra el C. W. Iberri, por resistencia á pagar derechos fiscales que tenía causados.

ACTA DEL JUICIO VERBAL.

En nueve del corriente (Junio) presentes ante mí las partes interesadas en este juicio á efecto de alegar sobre sus respectivos derechos en vista de las pruebas aducidas, expuso el C. Administrador de la aduana: que encuentra en las declaraciones de los Señores Lubbert, Camon y Moller una aseveracion enteramente falsa, cual es la de que reconocieron la carga averiada á petición del Sr. Iberri, cuando el café existía

aun en los almacenes de la aduana: esto no es cierto, pues ni el mismo Sr. Iberri se habia apercebido de la averia sino despues del despacho, hecho el cual, el expnente solo permitió que se pusiera dicha carga en el zahuan de la aduana y no en los almacenes, sin responsabilidad alguna de parte de la oficina: que hace esta observacion, porque de lo contrario habria que convenir en que los empleados eran responsables de haber despachado como buena una mercancía averiada. Que respecto de la cuestion de derecho, ya ha manifestado que en su concepto es inadmisiblo, como extemporánea, la gestion del causante para que se le haga una rebaja de los derechos despues del despacho llano de sus efectos, el cual presencié sin hacer objecion; y que de admitir aquella, se estableceria un pésimo precedente que haria imposible toda liquidacion en las aduanas, supuesto que en todo tiempo podria el comerciante alegar que habia encontrado averiadas las mercancías despachadas como buenas. El C. Iberri contestó: que no tiene embarazo en confesar la inexactitud que en las declaraciones de sus testigos ha encontrado el C. Administrador, la cual debe atribuirse á una inadvertencia ó falta de redaccion en la certificacion que le dieron, pues es positivo que una vez sacado el café para su reconocimiento y despacho, no volvió á meterse á los almacenes, sino al zahuan, en donde lo reconocieron dichos señores; que por lo demas, no cree que la admission de su justo reclamo en este caso especial, importa el establecimiento de un precedente perjudicial al buen despacho de la aduana, cuando se trata de un error notorio sobre la calidad de la mercancía despachada, probado plonamente y manifestado á la oficina antes de disponer de la carga, fundándose al efecto en la buena fé que debe ser la guía en todas las transacciones ó negocios entre el comercio y los particulares ó las oficinas públicas.

El C. Promotor fiscal dijo: que en vista